

Reflexiones sobre Justicia Juvenil y Trabajo Social. Posibilidades de resignificación de las intervenciones profesionales del Trabajo Social. La situación en la Provincia de Santa Fe.

Prf. Dra. Karina De Bella - UNR

El presente trabajo tiene por objeto abordar la relación existente entre el campo judicial-penal y el campo social, centrando el análisis en las intervenciones profesionales del Trabajo Social, en relación con los jóvenes judicializados de 16 a 18 años, de acuerdo a las normativas vigentes¹. Interesa introducirnos en el complejo legal y normativo, nacional e internacional, en tanto indican la necesidad de orientar las intervenciones teniendo en cuenta que **se trata de una población con características diferentes y específicas a las de los adultos**. Sostenemos que lo interdisciplinar y en este caso desde el Trabajo Social, pueden producirse ciertas movilizaciones, reorientaciones de las trayectorias de los jóvenes en las circunstancias aludidas. Esta hipótesis requiere problematizar la intervención profesional, en tanto el discurso y los enunciados del Trabajo Social son valorados en distintas instancias del proceso judicial, por lo que la intervención obliga a producir conocimientos, identificar lógicas y descubrir problemas. En este sentido Alicia González-Saibene sostiene la idea de que “un fuerte sostén teórico y su retroalimentación en el estudio y profundización constante de los aportes actualizados de las ciencias sociales en general, y de los campos específicos, se constituyen en el bagaje fundamental para una intervención fundada” (González-Saibene, 2011, citado en Cazzaniga comp., 2011: 251). En cuanto a las transformaciones legales, en nuestra provincia, respecto del *Código Procesal Penal de Menores de la provincia de Santa Fe* –en adelante CPM-; MARCÓN (2011) plantea:

La Ley 11.452 [Código Procesal Penal de Menores de la provincia de Santa Fe] destacó a la Provincia de Santa Fe en el contexto nacional. Por un lado, diez años

¹ De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad Ley 22278 -ley de fondo vigente- se establece: Art. 1.- No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación. Texto conforme a la ley 22803[...]. Art. 2.- Es punible el menor de dieciséis a dieciocho años de edad que incurriera en delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1 [...] (Régimen Penal de la Minoridad en adelante RPM). Cabe destacar que se trata de una definición de política criminal. Por tanto, se es punible por la edad y por el tipo de delito. Rige en la provincia de Santa Fe, la Ley 11.452 Código Procesal Penal de Menores de la provincia de Santa Fe.

antes de que a nivel nacional surgiera la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley N° 26.061 del año 2005), impulsó la diferenciación entre 'estado de abandono' y 'situación de abandono', conceptualización que se lee expresamente en el mensaje con el que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de ley al Poder Legislativo. Mediante esta precisión, dejó en manos del Poder Judicial sólo lo inherente al instituto jurídico denominado Patria Potestad (supuestos de estado de abandono) precisando que todas las situaciones de naturaleza social quedaban en manos del Poder Ejecutivo. Esta diferenciación fue reforzada y enriquecida más adelante, en el año 2009, por el propio Estado Provincial, a través de la Ley N° 12.967 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La competencia estrictamente penal se materializa, entonces, en el accionar de la Secretaría Penal. Asimismo, se mantiene la Secretaría Social, que actúa previa derivación de la primera. Cabe destacar que es la política criminal la que define quiénes serán objeto del reproche penal². Este punto no es menor. Supone la judicialización del sujeto. Se define claramente que no puede haber otros motivos más que el reproche penal enmarcado en la definición de punibilidad: por edad y por tipo de delito, según Ley N° 22.278, RPM-. Por vía de la Ley N° 26.061 han desaparecido las categorías de abandono, riesgo, peligro moral o material, situación irregular o, las más modernas, de vulnerabilidad o disfunción familiar.

La intervención del Trabajo Social está directamente asociada al diseño, formulación, proposición, seguimiento y evaluación de las medidas de las que son objeto/sujeto de intervención los jóvenes imputados o declarados autores responsables. En esta intervención profesional, que tiene como eje principal el proceso penal en curso, se despliegan y organizan estrategias de trabajo. Para arribar a las mismas, el trabajador social recurre a las políticas públicas ofertadas por el Estado para este sector poblacional³, y otros recursos estatales. Reúne el complejo legal normativo y la realidad social del joven. Aporta elementos para comprenderlo como sujeto en situación de conflicto con la ley teniendo en cuenta sus circunstancias personales, en las que atraviesa cambios subjetivos propios de la adolescencia, la familia, la historia, la sociedad, el

² Una conducta es reprochable, desde el punto de vista jurídico, cuando se infringe lo estipulado en las normativas vigentes de un orden social determinado (de acuerdo al Código Penal Argentino). La política criminal es la que define, en nuestro caso, a qué edad y por qué tipo de causas se es punible. Si se determina entonces que la conducta fue llevada a cabo en forma voluntaria, tendremos que cotejar ahora que ésta encuadre perfectamente en una figura prevista en el Código Penal o en otra ley especial de naturaleza penal.

³ En la provincia de Santa Fe las políticas sociales son nucleadas a través de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.

contexto, el territorio. Todo ello requiere de marcos conceptuales, reflexiones, definiciones técnico-operativas y propositivas, y el uso de instrumentos propios de la intervención profesional. Estas construcciones singulares para cada joven se materializan en informes que se elevan al juez, que es quien debe tomar disposiciones con sentido de proporcionalidad (relación acto y circunstancias del joven), de acuerdo con la 5ª Regla de Beijing y el ordenamiento legislativo vigente⁴.

Consideramos, por tanto, que la tarea del trabajador social en este campo es fundamental por su proximidad con el joven, por el conocimiento de su cotidianeidad, por la escucha entrenada que le permite crear un espacio propositivo y reflexivo de posible incidencia en la trayectoria de su vida, que es la materia prima de su trabajo⁵. A través del abordaje desarrollado por el trabajador social, se procura un proceso interventivo específico que opera a través de las medidas que el juez dispone. En el esquema normativo vigente se denominan “medidas tutelares” y se encuentran señaladas en el artículo nº 35 del CPM, encontrándose en el artículo nº 98 del mismo las medidas alternativas a la privación de libertad.

Si bien el *corpus juris* de la justicia juvenil marca los objetivos de la misma, cada juez interpreta y pone mayor o menor énfasis en unos u otros criterios establecidos, pauta formas de trabajo y de relacionamiento diferentes con la Secretaría Social. Por lo que no hay una mirada unívoca sino hermenéutico-interpretativa⁶ sobre las maneras de abordar la situación de los jóvenes.

En cuanto a los Trabajadores Sociales, incluidos en la Secretaría Social, si bien tienen definidas las incumbencias profesionales en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en general cada uno de ellos imprime un estilo personal a sus informes e intervenciones, no existe un modelo estandarizado para las mismas.

⁴ Esta regla refiere a dos de los más importantes objetivos de la justicia de menores. El primero es el fomento del bienestar del menor. Éste es el enfoque principal de los sistemas jurídicos en que los menores delincuentes son procesados por tribunales de familia o autoridades administrativas, pero también debe hacerse hincapié en el bienestar de los menores en los sistemas judiciales que siguen el modelo del tribunal penal, contribuyendo así a evitar las sanciones meramente penales. El segundo objetivo es el principio de la proporcionalidad. Éste es conocido como un instrumento para restringir las sanciones punitivas, y se expresa principalmente mediante la fórmula que reza que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad del delito. La respuesta a los jóvenes delincuentes no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, sino también en sus circunstancias personales. En definitiva, la regla 5ª sólo exige que la respuesta en los casos concretos de delincuencia o criminalidad de menores sea adecuada, ni más ni menos.

⁵ El Trabajo Social se encuentra con una “materia bruta” que motiva su intervención y que al resignificarse constituye su materia prima. La materia de la que parte la intervención resulta de procesos anteriores de los cuales se nutre el Trabajo Social y a los que va a reestructurar o resignificar en función de una dominante ideológica, constituyendo su proceso de producción. atributos o dimensiones, etc. (Karsz, 2004: 43).

⁶ En tanto posicionamiento o enfoque que privilegia la mirada del sujeto en busca del sentido por sobre las estructuras formales (González-Saibene, 2015, comunicación personal).

En este punto hay una cuestión destacable, que muchas veces no es comprendida cabalmente, y que hace a la diferencia entre la justicia de menores y la de mayores: en el esquema normativo vigente (RPM) el joven tiene derecho a que no se le aplique pena. Ésta es la diferencia radical entre ambos regímenes de justicia. No obstante, debemos señalar que el RPM prevé las mismas penas que para los adultos. Además, el juez de menores es el único con la facultad para evaluar la necesidad o no de aplicación de pena y, en caso de considerarla necesaria, tiene la facultad de reducirla al grado de la tentativa⁷. Ambas facultades están previstas en el RPM. Éste establece también que dentro de las condiciones que va a tener en cuenta el juez, una de ellas sea que se haya dispensado un “tratamiento tutelar” al joven. En este tratamiento aparece la cuestión de las medidas dispuestas: de cuáles valerse teniendo en cuenta la determinación de las problemáticas presentes, las respuestas de los dispositivos de las políticas públicas para abordarlas, las posibilidades objetivas y subjetivas del joven para resituarse en su historia personal. Por ello, si partimos desde este derecho que asiste al joven, la cuestión de las medidas cobra otro sentido, podríamos decir que las mismas pueden constituir **ofrecimientos de posibilidad**, y aquí es donde radica, para nosotros, la importancia de las intervenciones del Trabajo Social: tornar posible algún desplazamiento, hacer alguna apertura de perspectiva, esbozar nuevos puntos de vista en un proceso con el joven. Este aspecto nos permite aclarar que cuando hablamos del sujeto en situación de conflicto con la ley no reducimos la cuestión a él, sino que, como parte del proceso, incorporamos todos los aspectos en juego, incluidos los medios de trabajo, que sirven para realizar cierto objetivo social respecto del cual constituyen un medio, un instrumento y no una finalidad. Consideramos entonces que, cuando planteamos la idea de “ofrecimientos de posibilidad”, nos estamos refiriendo a producciones nuevas, resultado de ciertas transformaciones que incluyen al sujeto en su faz activa, como un sujeto socio-deseante y no como un objeto maleable. Asimismo, resulta necesario advertir sobre otra cuestión que (Mallardi, 2013: 15) “nos llevaría a caer en apreciaciones subjetivistas o relativistas de los procesos sociales (Tonet, 2010), [si afirmáramos] la necesidad de recuperar los discursos de las personas involucradas, de basar la intervención profesional en sus deseos y expectativas, negando toda relación entre el ser social y tendencias sociales mayores”. Ésta no es nuestra perspectiva.

⁷ El grado de tentativa es una escala prevista en nuestro Código Penal Argentino. De acuerdo al artículo n° 44 de dicho régimen: “La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de tentativa será prisión de diez a quince años. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente”.

En función de pensar los principios y objetivos que se establecen para la justicia juvenil, las funciones que fueron instituidas para los trabajadores sociales, los referenciales teóricos presentes en el ejercicio profesional, las prácticas desplegadas en el proceso de intervención desarrolladas con el joven, la relación acto-circunstancia, etc. es que nos detenemos a analizar el Trabajo Social en términos de dispositivo. Tomando a Michel Foucault, Giorgio Agamben y Saúl Karsz, entendemos al dispositivo como una red, en términos de su función como generador de procesos de subjetivación/desubjetivación y en cuanto a su valor estratégico.

Siguiendo esta conceptualización, consideramos que al hablar de dispositivo, específicamente en este campo, los elementos a considerar son los siguientes: las definiciones en torno al modo en que se concibe la justicia juvenil y las tensiones entre la reintegración social y la penalización; las definiciones en torno a la manera como se concibe el delito y, por ende, la particular manera de establecer relaciones entre los sujetos y las relaciones sociales más amplias; las políticas sociales y su imbricación en esta problemática. Forman parte también de este dispositivo lo dicho acerca de las incumbencias; la mirada del Trabajo Social en permanente comunicación con el joven, su familia y/o terceros responsables, y con los anclajes institucionales; y la interdisciplina que se juega entre el saber jurídico y el saber social.

Mostrar, de alguna manera, *la trastienda de la justicia juvenil*, nos permite aportar a los debates actuales y encontrar algunas de las claves que hacen a esta justicia, especial. Una cuestión queda abierta y es si como sociedad nos encontramos en condiciones de sobrellevar este tipo de respuestas diferenciadas de la justicia juvenil (no aplicación de pena o reducción a la escala de la tentativa, restauración) en un momento histórico de gran inseguridad que ha acrecentado la sed de venganza. Un desafío enorme del vivir juntos, pero que creemos posible base a un ejercicio efectivo de la justicia en todos sus órdenes.

De allí la importancia del tema y desde la disciplina, contribuir a la construcción de un Trabajo Social preocupado por los derechos y por las formas y contenidos de este *vivir juntos*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GARCÍA FANLO, L. (2011). "¿Qué es un dispositivo? Foucault, Deleuze, Agamben", en *Aparte Rei*, España, Nº 74. [En línea: 19/11/2014]. Disponible en:

<http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/fanlo74.pdf>

- GONZÁLEZ SAIBENE, A. (2011). "Conocimiento, intervención, transformación", en Cazzaniga, Susana (comp.) *Entramados conceptuales en Trabajo Social. Categorías y problemáticas de la intervención profesional*. Paraná: Fundación la Hendija.
- KARSZ, S. (2007). *Problematizar el Trabajo Social. Definición, figuras, clínica*, Barcelona: Gedisa.

- MALLARDI, M. (2013). "Cuestión social y situaciones problemáticas: aportes a los procesos de intervención en Trabajo Social", en *Revista Cátedra Paralela*, Rosario, N° 13.

- MARCÓN, OSVALDO (2011). *Jóvenes en situación de conflicto con la ley penal: ¿cómo relatan sus historias? Análisis y perspectivas desde la Justicia Juvenil Restaurativa*, Buenos Aires: Teseo.

Prof. Dra. Karina De Bella- Facultad de Ciencia Política y RRH-UNR

Trabajadora Social Juzgado de Menores N°3 Rosario, Tribunales Provinciales de Santa Fe

Integrante del Centro de Investigación en Campos de Intervención en Trabajo Social – CleCITS- Universidad Nacional de Rosario

Correo electrónico: karina40debella@gmail.com